

**AUDIENCIA PROVINCIAL
VALÈNCIA**

- - -

SECCIÓN TERCERA

Rollo penal (Tribunal del Jurado) nº 67/2021

Dimanante del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado nº 32/2020 de la
Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de València

Dimanante del Procedimiento ante el Tribunal del Jurado nº 284/2019 del
Juzgado de Instrucción nº 1 de Ontinyent

**SENTENCIA
Nº 267/21**

En la ciudad de Valencia, a siete de mayo de dos mil veintiuno.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de València, presidido por el Magistrado D. Lamberto Juan Rodríguez Martínez, y compuesto por los Jurados D. --, Dª --, D. --, D. --, D. --, Dª --, Dª --, Dª -- y Dª --, ha visto en juicio oral y público la causa seguida con el número 32 de 2020 de la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de València, luego registrada como Rollo Penal nº 67/2021 de esta Sección Tercera, procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent, por el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, por delitos de asesinato y hurto o robo, contra XXX, con D.N.I número NUM, nacido en Ontinyent (València) el XX-XX-1978, hijo de -- y --, y cuyas demás circunstancias personales constan en autos, en situación de prisión provisional por esta causa, estando privado de libertad desde el 13-07-2019.

Han sido partes en el juicio, el Ministerio Fiscal, como acusador público, representado por Dª. Isabel Company; AAA, como acusación particular, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosario Calatayud Ribera y defendida por el Letrado D. Rafael Ortiz Mora; BBB, también como acusación particular, representado por el Procurador de los Tribunales D. Josep F. Albert García y defendido por la Letrada Dª María José Bultó Chirivella; CCC, como acusación particular, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Laura Toledano Navarro y defendido por la Letrada Dª María Mercedes Pastor Calabuig; DDD, igualmente como acusación particular, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Beatriz Navarro Ballester y defendida por el Letrado D. Ignacio Javier Juan Esplugues, y el mencionado acusado, representado por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Vizcaíno Gandía y defendido por el Letrado D. Antonio Carlos Serrano Chaques.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En sesiones que tuvieron lugar los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2021 y 3 de mayo de 2021 se celebró ante este Tribunal juicio oral y público en la causa reseñada en el encabezamiento de la presente resolución, practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas y no renunciadas.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1º.1ª en relación con el artículo 138 del Código Penal y un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234.1 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó se le impusiera, por el delito de asesinato, la pena de veintitrés años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y, por el delito de hurto, la pena de quince meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; comiso y destrucción del martillo utilizado y de los demás efectos registrados como pieza de convicción nº 6/2019, y pago de las costas procesales, y que por vía de responsabilidad civil indemnice a AAA, BBB, DDD y CCC en 187.000 euros por los daños morales por la muerte de su padre, correspondiendo 31.000 euros para cada uno de sus hijos AAA y BBB y 62.500 euros a cada uno de sus hijos DDD y CCC, y que igualmente indemnice a todos ellos de forma conjunta y solidaria en 389 euros por los efectos sustraídos y no recuperados, cantidades que devengarán los intereses determinados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La representación de AAA en el mismo trámite calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1º.1ª del Código Penal y un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234.1 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de confianza del artículo 22.6ª del Código Penal, por lo que solicitó se le impusiera, por el delito de asesinato, la pena de veinticinco años de prisión y, por el delito de hurto, la pena de doce meses de prisión, accesorias legales y pago de costas incluidas las de la acusación particular, y que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en un total de 250.000 euros a repartir de forma igualitaria entre ellos por el fallecimiento de su padre y 114,50 euros a cada uno de los hijos por los efectos sustraídos y no recuperados, más intereses legales.

La representación de BBB en el mismo trámite calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1º.1ª del Código Penal y un delito de robo con violencia previsto y penado en los artículos 237, 242.1, 2 y 3 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo

que solicitó se le impusiera, por el delito de asesinato, la pena de veinticinco años de prisión y, por el delito de robo con violencia, la pena de cuatro años, tres meses y 1 día de prisión; accesorias legales; pago de costas incluidas las de la acusación particular, y que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en 62.500 euros para cada uno de ellos por el fallecimiento de su padre y 114,50 euros a cada uno de los hijos por los efectos sustraídos y no recuperados, más intereses legales.

La representación de CCC en el mismo trámite calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1º.1ª del Código Penal y un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234.1 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó se le impusiera, por el delito de asesinato, la pena de veinticinco años de prisión y, y, por el delito de hurto, la pena de doce meses de prisión, accesorias legales y pago de costas incluidas las de la acusación particular, y que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en 62.500 euros para cada uno de ellos por el fallecimiento de su padre y 114,50 euros a cada uno de los hijos por los efectos sustraídos y no recuperados, más intereses legales.

La representación de DDD calificó los hechos objeto del proceso como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1º.1ª del Código Penal y un delito de hurto previsto y penado en el artículo 234.1 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por lo que solicitó se le impusiera, por el delito de asesinato, la pena de veinticinco años de prisión y, y, por el delito de hurto, la pena de doce meses de prisión, accesorias legales y pago de costas incluidas las de la acusación particular, y que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en 62.500 euros para cada uno de ellos por el fallecimiento de su padre y 114,50 euros a cada uno de los hijos por los efectos sustraídos y no recuperados, más intereses legales.

TERCERO.- La defensa del acusado, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos enjuiciados como constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1 del Código Penal y un delito de hurto del artículo 234.1 del Código Penal, de los que estimaba criminalmente responsable en concepto de autor al acusado XXX, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes del artículo 21.1 y 3 en relación con el artículo 20.2 todos del Código Penal, por lo que solicitó su condena a una pena de quince años de prisión por el delito de asesinato y de siete meses de prisión por el delito de hurto, adhiriéndose al Ministerio fiscal en cuanto a la responsabilidad civil.

CUARTO.- Concluido el juicio oral, por el Magistrado Presidente se procedió, después de la preceptiva audiencia de las partes, a someter al Jurado el objeto del veredicto, con entrega del correspondiente escrito y, tras las oportunas instrucciones, se retiró el Jurado a deliberar.

QUINTO.- Una vez emitido y dado lectura al veredicto, al ser éste de culpabilidad por los delitos de asesinato y hurto o robo, se concedió la palabra a

las partes, y por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares se mantuvieron las peticiones de penas y responsabilidad civil de sus conclusiones definitivas, y la defensa igualmente mantuvo sus peticiones de penas y responsabilidad civil.

II. HECHOS PROBADOS

De conformidad con el veredicto del Jurado, se declara probado:

1º.- El acusado XXX, mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se encontraba entre las 16'00 horas y las 20'00 horas del día 6 de julio de 2019 en el domicilio de YYY , sito en la calle DIR nº -- de Ontinyent.

2º.- En un momento dado se inició una discusión entre ambos cuando se encontraban en el pasillo principal de la vivienda y se dirigían hacia la puerta de salida.

3º.- En ese momento el acusado, con un martillo que había cogido en la misma vivienda, propinó un golpe a YYY , que cayó al suelo boca abajo.

4º. El golpe fue propinado por el acusado cuando se encontraba en el pasillo a la espalda de YYY , quien, por tanto, fue atacado por sorpresa por el acusado.

5º. Una vez caído YYY en el suelo boca abajo, el acusado pudo aprovechar que YYY , por su posición tenía limitada su capacidad de defenderse y, además, que YYY tenía sus capacidades psicofísicas afectadas por el alcohol y sustancias estupefacientes que había ingerido con anterioridad, lo que limitaba aún más su capacidad de defensa.

6º.- Aprovechando esas limitaciones en las posibilidades de defensa de YYY y movido por el ánimo de acabar con su vida, el acusado, con el martillo que portaba, le propinó a YYY más de un golpe en la cabeza y en la cara, causándole la muerte inmediata por traumatismo craneoencefálico y consiguiente destrucción de centros neurológicos vitales.

7º.- A continuación el acusado, guiado por el propósito de enriquecerse a costa del patrimonio ajeno, hallándose YYY yacente en el suelo sin vida, procedió, tras rebuscar en el interior de la vivienda cuanto de valor pudiera encontrar, a apoderarse de un teléfono móvil marca XIAOMI modelo MI A2 con IMEIS nº NUM y NUM y con tarjeta de la compañía DIGIMOVIL nº NUM, y una cadena de oro y una cruz de oro de Caravaca que portaba normalmente YYY en el cuello.

8º.- El acusado se marchó del domicilio con tales efectos en su poder, habiendo procedido a vender en el establecimiento de compraventa de oro Joyería "BOMAR03" de Xàtiva la cruz de Caravaca por un precio de 19 euros.

9º.- Como consecuencia de estos hechos YYY sufrió las siguientes lesiones: 6 heridas de 3 mm en zona frontal derecha; foco contusivo en sien derecha; foco contusivo circular de 7x6 m en región temporal derecha; excoriación en tercio medio de ceja derecha de 11 mm; herida inciso-contusa en forma de “Y” en extremo distal de ceja izquierda; herida incisa de 1,5 cm en región postero-superior del pabellón auricular izquierdo; herida incisa de 2 cm en región postero-superior del pabellón auricular izquierdo paralela a la anterior y más cerca del pabellón auricular; erosiones irregulares en zona facial derecha a la altura de la mejilla; hematoma en “anteojos”; hemorragia conjuntival bilateral; herida contusa de 0,9 cm en región labial superior derecha; deformidad mandibular con fractura del maxilar inferior izquierdo; herida incisa de 1 cm y erosión de 1 cm en zona del mentón; excoriación de 0,8x2,4 cm en zona facial izquierda; herida anfractuosa con pérdida de sustancia en región superior del pabellón auricular izquierdo; hematoma en región posterior de hombro izquierdo; dos excoriaciones en escápula izquierda; hematoma de 10x2 cm en región posterior del brazo derecho; hematoma de 6x2 cm en región posterior del brazo derecho, y hematoma en región dorsal del antebrazo derecho.

Estas heridas le causaron un traumatismo craneoencefálico con dos fracturas craneales, focos de contusión con pérdida de sustancia en hemisferio izquierdo, focos hemorrágicos subaracnoideos bilaterales, hemorragia en tercer y cuarto ventrículos y hemorragia en lóbulo cerebeloso izquierdo que le causaron la muerte inmediata por destrucción de centros neurológicos vitales por traumatismo craneoencefálico.

10º.- YYY contaba con 66 años de edad en la fecha de los hechos y tenía como parientes más próximos a su esposa EEE, de la que se encontraba judicialmente separado en virtud de sentencia firme de fecha 12 de junio de 2012 dictada en el procedimiento de Separación nº 323/2012 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ontinyent, así como a sus cuatro hijos, AAA, nacida el XX-XX-1975, BBB, nacido el XX-XX-1981, DDD, nacida el XX-XX-1989, y CCC, nacido el XX-XX-1992, reclamando todos por los anteriores hechos.

11º.- El teléfono móvil marca XIAOMI modelo MI A2 del que se apoderó el acusado en el domicilio de YYY y valorado en 139 euros fue recuperado posteriormente totalmente destrozado; no se recuperó la cadena de oro que también había cogido el acusado en la vivienda de YYY valorada en 250 euros y se recuperó la cruz de Caravaca de la que igualmente se había apoderado el acusado valorada en 69 euros.

12º.- Los cuatro hijos de YYY reclaman la suma de 389 euros por los objetos sustraídos y no recuperados, mientras que FFF, propietario de la Joyería BOMAR03 de Xàtiva, nada reclama por la cantidad que abonó de buena fe al acusado cuando vendió en su establecimiento la cruz de Caravaca propiedad de YYY .

13º. En el momento de los hechos había una relación de cierta amistad entre el acusado y YYY .

14°. Al tiempo de quitar la vida a YYY y de apoderarse de los efectos de su propiedad, el acusado tenía sus facultades intelectivas y volitivas ligeramente mermadas por la previa ingesta de alcohol y drogas.

15°. El acusado golpeó y quitó la vida a YYY con su estado de ánimo gravemente alterado por la previa discusión mantenida con YYY .

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Habiendo recaído un veredicto de culpabilidad concurre una obligación de dedicar este fundamento jurídico a complementar la sucinta motivación que de su veredicto ha efectuado el Jurado en los términos y con la extensión que, por ejemplo, explica la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21-11-2016, rec. 10278/2016, nº 875/2016.

En este sentido, para todos aquellos apartados de los hechos probados de carácter desfavorable para el acusado que el Jurado ha estimado acreditados ha tenido una especial relevancia la confesión parcial del acusado llevada a cabo cuando prestó declaración en el juicio oral.

Dice sobre esta importante prueba la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12-12-2011, rec. 10865/2011, nº 1328/2011, que *"respecto del valor de la confesión -hemos dicho en STS 1105/2007, de 21-12 - es doctrina reiterada y constante la de que obtenida con las debidas garantías legales, constituye prueba idónea y suficiente para estimar enervada la presunción de inocencia (entre otras, SSTs. 7.10.82, 27.9.83, 25.6.84), 25.6.85, 23.12.86, 9.10.95, 27.1.97, 2.2.98, 4.5.98, 8.7.2002, 12.5.2003).*

Es cierto que son numerosas las sentencias en la que el Tribunal Supremo exige la necesidad de practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren la veracidad de la misma (STS. 26.12.89), pero ello no significa que la confesión por si sola, carezca de valor probatorio y que deba acreditarse por medio de otras pruebas distintas. Es significativa al respecto la STS. 18.1.89, que distingue entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del delito), y la prueba de la autoría y en la que se afirma expresamente que "si la Ley impone al Juez el deber de verificar la existencia del delito confesado para adquirir la convicción respecto de la verdad de la confesión, es porque sola (la confesión) no es prueba suficiente de la existencia misma del delito...(…).El art. 406 LECrim. exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del delito) y de la prueba de la autoría. Solo la primera no puede ser probada exclusivamente por la confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, la confesión es por si misma suficiente". Igualmente la STS. 20.12.91 recuerda cierto que el art. 406 LECrim. establece que la mera confesión del procesado no dispensará al Juez Instructor de practicar todas las diligencias necesarias para adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito", pero la STS. 30.4.90 precisa el valor pleno de las declaraciones de los acusados, acreditada la existencia del delito o falta, la confesión del acusado puede ser prueba suficiente de su autoría.

En efecto el art. 406 LECrim. no puede ser interpretado como una negación del carácter del medio de prueba que a la confesión indudablemente corresponde, sino como una afirmación del mismo. Por tanto, la confesión, en un correcto entendimiento de dicho precepto, no será idónea, en principio para probar el cuerpo del delito que no consta por otros medios de prueba. Pero constando el cuerpo del delito, la confesión puede, por si misma, ser prueba suficiente de la autoría."

En este caso el acusado admitió haber dado muerte a YYY , haberlo hecho propinándole más de un golpe con un martillo y, posteriormente, una vez muerto YYY , haberse apoderado de diversos efectos de su propiedad, de los que llegó a vender en una joyería una cruz de Caravaca.

Y lo que, como se ha visto, quedó acreditado mediante la confesión del acusado, fue probado, además, por otros medios probatorios practicados en el juicio oral y expresamente valorados por el Jurado en su veredicto, del mismo modo que quedaron acreditados los hechos no admitidos por el acusado: en esencia, que el primer golpe se lo propinó a YYY por la espalda y de forma sorpresiva.

En este sentido, valoró el Jurado la declaración de la amiga de acusado y fallecido, GGG, que ratificó en el juicio oral que el acusado estuvo el día de los hechos en su casa en compañía de YYY y que salió poco después de que lo hiciera YYY , confesándole unos días después de los hechos (el 11 de julio) que había matado a YYY , explicándole que estuvo en su casa, que bebieron, fumaron porros, consumieron droga, que se produjo una discusión porque YYY acusaba a un sobrino del acusado de haberle robado marihuana y que por este motivo se enfadó y que cuando iban andando por el pasillo hacia la salida, yendo delante YYY , el acusado cogió un martillo y le golpeó por detrás, continuando dándole golpes tras caer YYY al suelo tras ese primer golpe, hasta que quedó sin vida.

También le dijo que estuvo un tiempo en la casa, que cogió algunas cosas de valor y que salió para ir a su casa y luego marchar a casa de la testigo, a donde llegó sobre las 21'00 o 22'00 horas.

Le dijo el acusado que tras matar a YYY cogió unos calcetines que se puso en las manos y luego unos guantes para ir borrando sus huellas en la casa, reconociendo, sin embargo, que dejó olvidadas en una bolsa su cartera y unas llaves de su domicilio.

Atribuyó credibilidad el Jurado a las manifestaciones de la testigo por su amistad con los dos implicados y, además, porque lo que manifestó haber oído al acusado se vio a su vez corroborado por otros elementos probatorios.

Desde luego, la muerte de YYY quedó confirmada por los funcionarios policiales y la médico forense que intervinieron en el levantamiento de cadáver. La causa de la muerte de YYY fue confirmada por el informe de autopsia debidamente ratificado por sus autores en el juicio oral, identificando los forenses en dicho acto el martillo encontrado en la casa como compatible con las graves lesiones que presentaba YYY y que le causaron la muerte.

Que ese martillo fue el arma utilizada para quitar la vida a YYY fue reconocido por el acusado en el juicio oral, donde le fue exhibida la pieza de convicción, y confirmado igualmente por los restos de sangre y pelos (todos pertenecientes a YYY) que fueron encontrados en el martillo según la diligencia de inspección ocular durante la que fue hallado (ratificada por los funcionarios

policiales intervinientes) y el informe de ADN igualmente obrante en las actuaciones y ratificado en el acto del juicio.

La sustracción de los efectos identificados en el relato de hechos probados fue reconocida por el acusado en el juicio oral y parcialmente corroborada por la venta de uno de ellos (la cruz de Caravaca) pocos días después en una joyería de Xàtiva, así como por el hallazgo en la vía pública y roto del teléfono de la víctima.

Por lo demás, que la mayor parte de los golpes recibidos por YYY se produjeron cuando ya estaba en el suelo indefenso y que, además, fueron éstos los golpes más violentos (los que provocaron la pérdida de sangre y otras sustancias), quedó confirmado por las diligencias de inspección ocular practicadas en dos días distintos en el domicilio de YYY y ratificadas en el juicio oral, señalando que solo había proyecciones de sangre derivadas de los impactos en la cabeza de YYY hasta una altura de 1'20 metros, distancia indicativa de los dos hechos expresados: los golpes más violentos los recibió cuando ya estaba en el suelo y estando de pie no recibió ningún golpe que le hiciera sangrar.

Aunque irrelevante para la calificación de la muerte como asesinato (por concurrir y haberse reconocido y acreditado una alevosía de desvalimiento) el Jurado estimó probado que el acusado atacó por la espalda a YYY propinándole el primer golpe que le hizo caer al suelo y desencadenó al brutal agresión que siguió.

Negó el acusado ese ataque por sorpresa pero el Jurado ha valorado razonablemente la prueba practicada en el juicio oral, de tal forma que:

1º. La testigo de referencia GGG declaró que el acusado le reconoció que el primer golpe se lo había propinado por la espalda y por sorpresa a YYY .

2º. Aunque otros peritos intervinientes estimaron que no podían afirmarlo con seguridad, el funcionario policial número 81.986 manifestó que por la posición del cadáver y la configuración del lugar donde se encontraba parecía que había sido inicialmente golpeado por detrás.

3º. Los médicos forenses no detectaron en su informe de autopsia signos de que YYY hubiera forcejeado con el acusado, y ello contribuye a reforzar la tesis del ataque sorpresivo.

4º. Los Jurados examinaron la grabación de la diligencia de inspección ocular y observaron que el pasillo donde ocurrió la agresión tenía una anchura normal pero había tantos muebles y enseres en el mismo que no era posible que dos personas pudieran estar una junto a otra, de tal forma que YYY y el acusado solo pudieron caminar por ese pasillo uno detrás de otro, siendo esa disposición la que aprovechó el acusado para atacar por sorpresa a YYY .

Así acreditados los hechos nucleares de los dos delitos objeto de acusación (el asesinato y la sustracción de efectos), el Jurado ha declarado probada la ulterior venta de la cruz de Caravaca en una joyería porque así lo reconoció el

acusado, lo ratificaron sus acompañantes en ese momento GGG y HHH y lo confirmó el dueño de la joyería que adquirió la joya, FFF.

El valor de los efectos sustraídos quedó acreditado mediante la tasación pericial ratificada en el juicio oral y las circunstancias personales y familiares del fallecido no se discutieron y, además, quedaron acreditados por la documentación aportada a las actuaciones y la declaración de sus cuatro hijos en el juicio oral.

Como consecuencia del relato de hechos que se han declarado probados, el Jurado ha aprobado por unanimidad un veredicto de culpabilidad cuya forma jurídica se expone a continuación.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en los artículos 139.1.1ª y 138 del Código Penal y de un delito de robo con violencia en casa habitada previsto y penado en los artículos 237 y 242.1 y 2 del Código Penal.

Acreditado que el acusado causó dolosamente la muerte de YYY , la circunstancia que convierte el homicidio en asesinato sería la alevosía (art. 139.1.1ª), concretada en que, como se ha declarado probado, el acusado atacó sorpresivamente a YYY y, seguidamente, aprovechando la posición de la víctima en el suelo indefensa y con sus facultades disminuidas por la ingesta de alcohol y drogas, continuar el ataque hasta quitarle la vida.

En este sentido, dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15-03-2010, rec. 11187/2009, que *“la alevosía, que cualifica el asesinato respecto al tipo genérico del homicidio, existe cuando el sujeto emplea en su ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarlo, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido, (art. 22-1º del CP). La doctrina de esta Sala viene caracterizándola: A) Por su carácter mixto, y en tal sentido la Sentencia 155/2005 de 15 de febrero subraya que aunque tiene una dimensión predominantemente objetiva, incorpora un especial elemento subjetivo que dota a la acción de una mayor antijuricidad, denotando de manera inequívoca el propósito del agente de utilizar los medios con la debida conciencia e intención de asegurar la realización del delito, eludiendo todo riesgo personal, de modo que al lado de la antijuricidad ha de apreciarse y valorarse la culpabilidad, lo que conduce a su consideración como mixta. Y en análogo sentido la Sentencia 464/2005 de 13 de abril, entre otras muchas. B) Con esa doble dimensión que la convierte en mixta el punto esencial sobre el que convergen sus dos elementos está en la idea de falta de defensa, esto es de la anulación deliberada de la defensa de la víctima (SS 864/97, 13 de junio; 821/98, 9 de junio; 472/2002, 14 de febrero; y 730/2002, de 2 de noviembre). Su esencia se encuentra, pues, en la existencia de una conducta agresora que tienda objetivamente a la eliminación de la defensa; o bien en el aprovechamiento de una situación de indefensión cuyos orígenes son indiferentes (SS 1031/03, 8 de septiembre; 1214/03, 26 de septiembre; 1265/04, 29 de noviembre), lo que significa que no es imprescindible que de antemano el agente busque y encuentre el modo más idóneo de ejecución, sino que es suficiente que se aproveche en cualquier momento de forma consciente de la situación de indefensión de la víctima así como de la facilidad que ello supone (SS 1464/03, 4 de noviembre; 1567/03, 25 de noviembre; 58/04, 26 de enero; 1338/04, 22 de noviembre; 1378/04, 29 de noviembre). C) Las tres formas que puede adoptar esa idea esencial de la indefensión son: 1) la alevosía proditoria o traicionera, como trampa, celada, emboscada*

o traición. En ella se abusa de la confianza o de una situación confiada en la que el sujeto pasivo no teme una agresión como la efectuada (S 82/05, 28 de enero; 133/05, 7 de febrero); 2) La alevosía sorpresiva consistente en una actuación súbita, repentina o fulgurante, que por su celeridad no permite a la víctima reaccionar ni eludir el ataque. Esta modalidad es apreciable en los ataques rápidos y sin previo aviso (S 1031/03, 8 de septiembre; 1265/04, 2 de noviembre); 3) La alevosía por desvalimiento, en la que el sujeto busca o se aprovecha de las personales características o de la especial situación en que se encuentra la víctima, muy disminuida en sus posibilidades de defensa (niños, ancianos, inválidos, persona dormida, sin conciencia, etc...)”.

En este caso, como se ha dicho, concurre tanto la alevosía sorpresiva (negada por el acusado), como la alevosía por desvalimiento (admitida por el acusado y su defensa).

En lo que concierne a la sustracción de efectos del fallecido tras haberle quitado la vida, se estima más adecuada a la última doctrina del Tribunal Supremo la calificación propuesta por la representación de BBB en el sentido de considerar esa sustracción como constitutiva de un delito de robo con violencia y no de un delito de hurto (como postulaban las restantes acusaciones y la defensa).

Dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29-10-2020, nº 559/2020, que *“en cuanto a la violencia como elemento del delito de robo del art. 242 CP en supuestos de apoderamiento posterior al atentado contra la vida, tal cuestión ha sido analizada de forma detallada en la sentencia recurrida que recoge la evolución jurisprudencial en la materia, que culminó en el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala Segunda de 24-4-2018 que dispuso: “Cuando aprovechando la comisión de un ilícito penal en el que se haya empleado violencia y en la misma relación de inmediatez y unidad temporal se realiza un apoderamiento de cosas muebles ajenas se entenderá que se comete un delito del art. 237 del CP cuando se haya perpetrado con inmediatez al acto violento y sin ruptura temporal y la violencia facilite el acto del apoderamiento”.*

En efecto, respecto al alcance de la violencia que completa el delito de robo dijimos en la STS 399/2016: “El verbo emplear que determina el tipo penal significa hacer servir una cosa para un fin determinado. Por ello hemos de concluir que la violencia tanto se hace servir si se despliega para un fin como si se “utiliza” su resultado para ese fin, es decir, si de alguna manera es aprovechada en el sentido que en nuestra lengua tiene la voz aprovechar: utilizar cierta circunstancia para obtener provecho o conseguir algo en beneficio propio”. Y así hemos apreciado robo en supuestos en los que la decisión de sustraer se adopta en momento posterior a la de la conducta violenta. Fue esta una cuestión no exenta de discrepancia, que avocó a un debate en Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 24- 4-2018 en el que se adoptó el acuerdo antes transcrito. En palabras de la STS 328/2018 de 4-7, que desarrolló el mismo “lo relevante es que exista la funcionalidad de la violencia respecto de la sustracción, sea aquella anterior, coetánea o posterior a ésta. Eso sí, como se deriva del art. 237 CP y subraya el acuerdo del Pleno no jurisdiccional citado, si no existe inmediatez entre violencia y sustracción, es decir, proximidad en tiempo y espacio, mal se podrá predicar aquella funcionalidad de la violencia para la sustracción, por lo que no cabrá decir que ésta facilita aquella.

Por lo que concierne al elemento subjetivo del dolo es claro que el mismo ha de predicarse tanto de la violencia como de la sustracción y, cabe añadir, debe abarcar en lo cognitivo la funcionalidad el comportamiento violento y sus efectos para el objetivo patrimonial y en lo volitivo la decisión de rentabilizar esa utilidad. Pero esa referencia subjetiva en nada debe reconducirse necesariamente a la exigencia de presencia de ambas ya en un momento anterior a la violencia. Así se exigió en ocasiones, en lo que se

ha dado en determinar concepción "instrumental" de la violencia, requiriendo, como elemento del tipo, el cronológico de la concurrencia del doble dolo (de violencia y de sustracción) antes ya de dar comienzo a la violencia. Olvidando así que tan "instrumental" es la actuación violenta para el robo cuando se programa antes de cometer el desapoderamiento como cuando se aprovecha la utilidad de sus efectos aunque el dolo de sustraer surja ex post, al adquirir consciencia de aquellos efectos. Lo que excluye la "responsabilidad objetiva" que pudiera considerarse reprochable en los denominados tipos complejos de robo con violencia del artículo 501 del CP predemocrático. Entonces podía ser suficiente que el resultado de la violencia en las personas que la sufrían bastaba que acaeciera "con ocasión" del delito patrimonial. Lo que es inaceptable en la configuración exigida en la doctrina que se impuso por mayoritaria en la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 743/2018, de 7-2-2019)."

En este caso debe descartarse que el dolo de cometer la sustracción hubiera surgido en el acusado antes de quitar la vida a YYY , dado que, de un lado, el desarrollo de los hechos excluye cualquier planificación previa a la agresión y, de otro lado, la desproporción entre lo sustraído y la muerte de YYY (con quien el acusado tenía una cierta amistad) refuerza la exclusión de ese dolo inicial.

No obstante la doctrina jurisprudencial expuesta califica la sustracción como robo si, como en este caso, no se produce una ruptura temporal entre la violencia ejercida sobre la víctima y la sustracción de sus efectos.

Incluso aunque el informe de autopsia hubiera fijado la hora de la muerte de YYY a primera hora de la tarde (a partir de las 16'00 horas y no dentro del intervalo de cuatro horas informado por los forenses), no puede estimarse que se llegara a producir una ruptura temporal entre el acto violento y la sustracción cuando, además, no consta que el acusado abandonara el domicilio de YYY en ningún momento, limitándose a, una vez producida la muerte, recoger los vestigios incriminatorios (que luego olvidó), borrar sus huellas y registrar el domicilio de YYY para apoderarse de algunos efectos de valor.

Procede, por tanto, esa calificación de la sustracción como robo con violencia, concurriendo, además, el tipo agravado del artículo 242.2 al haberse cometido los hechos en casa habitada (el domicilio de la propia víctima).

No se estima procedente, sin embargo, apreciar el tipo agravado del uso de armas del artículo 242.3 también invocado por la acusación particular, dado que, como se ha dicho, no se ha acreditado que el acusado entrara en el domicilio de YYY con la intención de cometer la sustracción de sus efectos. Siendo ello así, y como se ha declarado probado por el Jurado, la muerte de YYY se produjo tras una discusión con el acusado ajena a cualquier ánimo de apoderamiento de efectos de su propiedad.

Con esa muerte queda agotada la utilización del martillo y de cualquier agravación inherente al mismo.

El ulterior aprovechamiento de una muerte ya consumada para cometer la sustracción no justifica que los medios empleados para causar la muerte (previa al

dolo sobrevenido de apoderamiento de efectos) deban agravar un robo para cuya comisión no precisó ni utilizó el autor de ninguna clase de arma.

Finalmente, se plantea la relación concursal entre los dos delitos: el asesinato y el robo.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12-03-2019, rec. 10244/2018, nº 131/2019, declara que *“en el caso enjuiciado es claro que el acusado acabó utilizando la violencia homicida que ejerció sobre la víctima para perpetrar el delito contra la propiedad dentro del establecimiento. Se valió así de ella como medio para cometer el segundo delito, aunque su decisión sobre el aprovechamiento medial la adoptara después de haber agredido mortalmente a la víctima.*

La calificación de concurso medial favorece al reo, dado que el art. 77.3 del C. Penal dispone que en esa clase de concursos se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena conforme a los criterios expresados en el artículo 66. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración previsto en el artículo anterior.”

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 04-07-2018, rec. 10416/2017, nº 328/2018, señala que *“en caso de dolo sobrevenido a la actividad violenta se excluye la relación que se requiere para establecer entre uno y otro delito la relación concursal medial del artículo 77.1 del Código Penal. Ambos delitos se penarán como concurso real.”*

Han confirmado condenas con concurso real entre el delito violento precedente y el robo con violencia delitos, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11-11-2020, rec. 10689/2019, nº 594/2020; 29-10-2020, nº 559/2020, y 14-01-2020, rec. 10374/2019, nº 664/2019.

De conformidad con la doctrina jurisprudencial mayoritaria se estima, por tanto, procedente la apreciación del concurso real entre asesinato y robo violento, que, además, queda amparado por el inciso final del artículo 242.1 al fijar la pena para el delito de robo *“sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase”*.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 28 del Código Penal de los delitos que se han calificado aparece como responsable criminalmente el acusado XXX por haber realizado directamente los hechos que los integran.

CUARTO.- En la realización de los dos delitos concurre la circunstancia atenuante analógica de intoxicación etílica y por drogas del artículo 21.7 en relación con el artículo 21.2 del Código Penal.

El Jurado declaró probado que al tiempo de la comisión de los hechos el acusado tenía sus facultades intelectivas y volitivas ligeramente mermadas por la previa ingesta de alcohol y drogas.

Para ello tuvo en cuenta que el agente del Cuerpo Nacional de Policía

número 95.392 había visto al acusado muy pocas horas antes de los hechos y constató que estaba muy agresivo y que era posible que hubiera tomado alguna droga.

También valoró que GGG estuvo inmediatamente después con el acusado e igualmente declaró, con la ventaja de quien conoce desde hace años al acusado, que creía que había consumido alcohol, que estaba alterado.

Igualmente puede valorarse como razonable que si se pudo comprobar que YYY llegó a ingerir alcohol y cocaína, que el acusado tomara alguna de tales sustancias mientras estuvo en compañía de YYY .

Dice en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 01-10-2020, rec. 10323/2020, nº 488/2020, que *“la actual regulación del Código Penal contempla como eximente la intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, junto a la producida por drogas u otras sustancias que causen efectos análogos, siempre que impida al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, exigiendo además como requisitos que tal estado no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción penal y que no se hubiese previsto o debido prever su comisión. Cuando la intoxicación no es plena, pero la perturbación es muy importante, sin llegar a anular la mencionada capacidad de comprensión o de actuación conforme a ella, la embriaguez dará lugar a una eximente incompleta del artículo 21.1º en relación con el 20. 2º CP. Los casos en los que pueda constatarse una afectación de la capacidad del sujeto debida al consumo de alcohol de menor intensidad, deberían reconducirse a la atenuante del artículo 21.2, en supuestos de grave adicción al alcohol de relevancia motivacional en relación al delito; o a una analógica del artículo 21.7ª, pues no es imaginable que la voluntad legislativa de 1995 haya sido negar todo efecto atenuatorio de la responsabilidad penal a una situación que supone un mayor o menor aminoramiento de la imputabilidad, cuando es evidente que existe analogía -no identidad- entre una cierta alteración de las facultades cognoscitivas y/o volitivas producida por una embriaguez voluntaria o culposa ocasional (nunca buscada con propósito de delinquir) y una perturbación de mayor intensidad que es consecuencia de una embriaguez adquirida sin previsión ni deber de prever sus eventuales efectos, que es la contemplada como eximente incompleta en el núm. 1º del artículo 21 puesto en relación con el núm. 2º del art. 20, ambos del CP (entre otras SSTs 60/2002, de 28 de enero; 174/2010, de 4 de marzo; 893/2012, de 5 de noviembre; 644/2013, de 19 de julio; 489/2014, de 10 de junio; 725/2016, de 28 de septiembre; o 205/2017, de 28 de marzo).”*

En este caso el Jurado hubo de declarar no probada una mayor afectación de las facultades del acusado ante la completa falta de una prueba toxicológica o de similar fiabilidad que acreditara ese grado de afectación.

La ligera disminución de facultades declarada probada justifica la apreciación de la atenuante analógica ya indicada.

No concurre, por el contrario, la circunstancia atenuante de arrebató u obcecación invocada por la defensa. El Jurado declaró probado que el acusado golpeó y quitó la vida a YYY con su estado de ánimo gravemente alterado por la previa discusión mantenida con YYY , pero ello no es suficiente para la apreciación de la atenuante.

Dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26-12-20014, rec. 10569/2014, que *“en relación a la atenuante de arrebató u obcecación en otro pasional de entidad semejante, la jurisprudencia de esta Sala SS. 539/2014 de 2.7, 246/2011 de 14.4, 170/2011 de 29.3, ha señalado que son dos los elementos que configuran esta atenuante: causa y efecto.*

Ha de existir una causa o estímulo, que ha de ser importante de modo que permita explicar (no justificar) la reacción delictiva que se produjo. Ha de haber cierta proporcionalidad entre el estímulo y la reacción (STS 27.2.92). Ha de proceder del comportamiento precedente de tal víctima (STS 20.12.96). El motivo desencadenante no ha de ser repudiable desde el punto de vista socio-cultural (STS 14.3.94). 2º. Tal causa o estímulo ha de producir un efecto consistente en una alteración en el estado de ánimo del sujeto, de modo que quede disminuida su imputabilidad, no tanto que llegue a integrar un trastorno mental transitorio constitutivo de una eximente completa o incompleta, ni tan poco que no exceda de una mera reacción colérica o de acaloramiento o leve aturdimiento que suele acompañar a algunas figuras delictivas y ha de considerarse irrelevante (STS 2.4.90). Arrebató se dice cuando la reacción es momentánea y fulgurante, inmediata al estímulo, mientras que la obcecación tiene una mayor duración y permite el transcurso de un mayor lapso de tiempo respecto del estímulo. En todo caso el transcurso de un tiempo excesivo excluye la atenuante (S. 14.4.92). El tercer término, el estado pasional de entidad semejante, añadido en 1983 probablemente para poder acoger el contenido de aquellas otras atenuantes de similar contenido que por aquella importante modificación legal quedaron derogadas (provocación o amenaza, vindicación próxima), extiende el ámbito de esta atenuante por voluntad del legislador, pero quizá de modo superfluo ante la amplitud de los otros elementos alternativos”.

En este caso, la alteración en el ánimo del acusado no es suficiente para apreciar la atenuante, de un lado, porque esa alteración no procede exclusivamente de un comportamiento precedente de la víctima, sino de una discusión entre el acusado y la víctima por razones que, además, no han quedado acreditadas. Y sobre todo, en segundo lugar, no hay ninguna proporcionalidad entre el estímulo (la alteración por una discusión) y el efecto (el brutal ataque a la víctima que le causa la muerte). Obviamente, ello no impide que pueda valorarse la alteración el estado de ánimo del acusado declarada probada por el Jurado para la individualización de la pena.

Finalmente, no concurre la circunstancia agravante de abuso de confianza invocada por una de las acusaciones particulares, dado que el único hecho declarado probado a tal efecto por el Jurado (único hecho en que además podía fundarse a la vista de los escritos de acusación) se limita a declarar que había una relación de cierta amistad entre el acusado y la víctima.

Dice con carácter general la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22-07-2020, rec. 1009/2019, nº 419/2020, que *“la agravante genérica de “obrar con abuso de confianza” (art. 22.6 Código Penal), requiere para su apreciación dos requisitos: a) uno “ subjetivo”, integrado por la relación de confianza entre sujeto activo y perjudicado, caracterizada dicha relación por razones de convivencia social, laboral o profesional, por amistad o por lazos de parentesco, de los que surgen recíprocamente deberes jurídicos o naturales de lealtad entre los vinculados; y b) otro “objetivo”, consistente en la apreciación de cierta facilidad para cometer el delito precisamente por la situación que generan esos deberes recíprocos existentes entre el agente y el sujeto pasivo, lo que es aprovechado intencionalmente por el autor del delito (STS 13 de febrero de 1997)”.*

Así las cosas, es ante todo dudosa la compatibilidad entre el abuso de confianza y la alevosía (ya apreciada para la calificación del asesinato) y por tal motivo la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18-02-2016, rec. 10697/2015, nº 107/2016, declara que *“la jurisprudencia de esta Sala ha oscilado entre la compatibilidad e incompatibilidad con la alevosía. La excluyó siempre en la alevosía proditoria o traicionera.*

En cualquier caso se precisaría para su estimación autónoma de la alevosía, que la confianza entre sujeto activo y pasivo haya sido causa favorecedora de la obtención de los objetivos ilícitos y que no constituya una circunstancia o elemento empleado en nuestro caso por el pariente para el aseguramiento del hecho y la evitación de la reacción defensiva de la víctima.”

En el caso de autos la previa relación entre acusado y víctima era de cierta amistad, no de una amistad íntima.

De otro lado, no cabe un aprovechamiento de esa cierta amistad, cuando no se ha declarado probado que el acusado acudiera al domicilio de YYY y accediera al mismo con la intención de matarlo. Se ha declarado probado que estuvo durante un tiempo con el mismo hasta que, con motivo de una discusión, le golpeó y le quitó la vida. No hay un desvalor distinto del que ya se ha considerado al apreciar la agravante específica de alevosía.

Finalmente, no puede ni siquiera plantearse la apreciación de una circunstancia agravante de ensañamiento invocada por una de las acusaciones particulares en su informe pero no interesada en ninguno de los escritos de calificación de las acusaciones.

Por todo ello, en orden a la graduación de las penas, se hace uso del arbitrio que le otorgan los artículos 66 y siguientes del Código Penal, estimando procedente, en el presente caso imponer, por el delito de asesinato, la pena de diecisiete años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y, por el delito de robo con violencia, la pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Para el delito de asesinato se impone la pena en la mitad inferior por la concurrencia de la circunstancia atenuante (art. 66.1.1ª del Código penal). Dentro de ésta (de quince a veinte años de prisión) se sitúa cerca del mínimo legal pero sin llegar al mismo valorando en contra del acusado la brutalidad y gratuidad del ataque contra YYY .

Para el delito de robo con violencia se impone en su mínimo legal la pena señalada para el tipo agravado del artículo 242.2 del Código Penal por la concurrencia de la circunstancia atenuante y por el escaso valor de los efectos sustraídos.

De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Penal, procede acordar el comiso y destrucción del martillo utilizado por el

acusado para la comisión del asesinato, sin que quepa en esta resolución ningún pronunciamiento sobre otros efectos que no aparecen mencionados en el relato de hechos probados.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas han de imponerse al condenado penalmente como responsable de un delito o falta, por lo que procede la imposición a XXX, incluidas las de las acusaciones particulares, dado que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 07-07-2011, rec. 10073/2011, *“es criterio de esta Sala, al examinar los criterios aplicables en la imposición de las costas en el proceso penal que, conforme a los artículos 123 del Código Penal y 240 de la LECr., ha de entenderse que rige la «procedencia intrínseca» de la inclusión en las costas de las de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el Tribunal, de las que se separa cualitativamente, evidenciándose además como inviables, extrañas o perturbadoras (SSTS 147/2009, de 12-2; 381/2009, de 14-4; 716/2009, de 2-7; y 773/2009, de 12/7)”*, circunstancias que no concurren en el caso de autos.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 109 del Código penal en relación con el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil todo responsable penal lo es también civil, respondiendo directamente en su lugar o subsidiariamente con él las personas mencionadas en los artículos 120 y 121 del Código penal, por lo que procede, en el presente caso, procede condenar al acusado XXX a que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en 62.500 euros para cada uno de ellos por los daños morales derivados del fallecimiento de su padre, debiendo indemnizar igualmente a AAA, BBB, CCC y DDD en 97,25 euros para cada uno de ellos por los efectos sustraídos y no recuperados, todo ello más los intereses determinados en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al valorar la procedencia de las indemnizaciones solicitadas por el fallecimiento violento de la víctima, debe tenerse en cuenta que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 07-02-2019, rec. 10194/2018, nº 743/2018, *“la sentencia 580/2017 de 19 de julio, condensó la doctrina de esta Sala sobre la cuestión, y señalo que se ha reconocido que el “Baremo” ha sido tomado en la práctica judicial de manera orientativa cuando se trata de fijar indemnizaciones civiles en el orden estrictamente penal, teniendo en cuenta para ello las puntuaciones de las lesiones y de las secuelas padecidas que determinan los informes médico-forenses. Sin embargo, no es exigible la aplicación del baremo en los casos de delitos dolosos, lo que no impide que pueda ser tomado en consideración con carácter orientativo. Y afirmó expresamente “el baremo contenido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, está previsto para la siniestralidad vial y no resulta aplicable en el caso de un delito doloso de homicidio, ajeno al tráfico automovilístico. El propio apartado primero del Anexo establece que “El presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso”*.

El efecto expansivo del Baremo, previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil ha sido admitido por este Tribunal, pero siempre como criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que

informa los arts. 1.106 y 1.902 del Código Civil (SSTS 596/2013, de 2-7; 480/2013, de 22-5; y 799/2013, de 5-11).

La concesión de cantidades superiores al baremo en casos de delitos dolosos, máxime en supuestos especialmente traumáticos y violentos como pueden ser los supuestos de homicidios y asesinatos, se ha reconocido reiteradamente por la jurisprudencia de esta Sala (SSTS 772/2012, de 22 de octubre , y 799/2013, de 5 de noviembre , entre otras)".

Precisamente la sentencia mencionada, la 580/2017, confirmó un pronunciamiento indemnizatorio derivado de la muerte violenta de la madre a favor de dos hijos mayores de edad, por importe de 120.000 euros a cada uno de ellos.

Atendiendo a los precedentes jurisprudenciales reseñados, no se puede acoger la tesis de la parte recurrente. La pérdida de una madre aun cuando sea de avanzada edad, genera en el caso de relaciones normalizadas un grave perjuicio emocional para sus hijos, aun cuando mantengan ya respecto a ella solo vínculos afectivos y no de dependencia. Especialmente cuando la muerte ha sido causada dolosamente a consecuencia de un comportamiento violento que recrudece el sentimiento de pérdida ante lo injustificado e inesperado del deceso y la representación del dolor y desasosiego que la víctima hubo de experimentar en sus últimos instantes de vida. Nos encontramos fuera del ámbito de los baremos aplicables a los actos de circulación viaria con vehículos de motor, y la vistas las circunstancias que convergen en el caso concreto, no puede considerarse la indemnización fijada ni excesiva ni arbitraria que clame por una reducción en sede de casación."

La indemnización confirmada por la citada sentencia era de 100.000 euros para cada uno de los dos hijos de la fallecida.

En el caso de autos el Ministerio fiscal reclamó una indemnización para cada uno de los cuatro hijos del fallecido por el daño moral derivado de su fallecimiento, interesando en concreto 31.000 euros para cada uno de sus hijos AAA y BBB y 62.500 euros para cada uno de sus hijos DDD y CCC.

Y cada uno de esos cuatro hijos, personado como acusación particular, reclamó una indemnización para sí y para los restantes hijos en cualquier caso por importe de 62.500 euros para cada uno de ellos.

Así las cosas, en cuanto a la indemnización por el fallecimiento de YYY , se estiman razonables las cantidades solicitadas por las acusaciones particulares (62.500 euros para cada hijo) teniendo en cuenta tanto el carácter doloso de la muerte de su padre como las especiales circunstancias en que se produjo (la brutalidad del ataque que le causó la muerte) y que incrementan el dolor y daño moral que debe ser resarcido. En ningún caso pueden estimarse acreditadas las insinuaciones que formuló la defensa acerca de un distanciamiento entre el fallecido y sus hijos que pudiera afectar a la entidad de su daño moral y, por tanto, al importe de su indemnización.

En lo que concierne a la indemnización por los efectos sustraídos y no recuperados, es claro que el importe total de éstos, como consta en la tasación pericial y se ha declarado probado por el Jurado, asciende a 389 euros, por lo que a cada hijo corresponde una cuarta parte de dicha cantidad (97,25 euros) y no la cantidad reclamada por las acusaciones particulares, que incluye el valor de la cruz de Caravaca también sustraída pero que sí fue recuperada.

Vistos, además de los citados, los artículos 24, 25 y 120.3 de la Constitución, los artículos 1, 5, 10, 12, 13, 15, 27 a 31, 32 a 34, 54 a 57, 58, 59, 61 a 72, 109 a 122 del Código Penal, y los artículos 142, 239 a 241, 741 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de València, en nombre de Su Majestad el Rey

ha decidido:

Primero: Condenar a XXX, como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de asesinato y de un delito de robo con violencia en casa habitada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de intoxicación por alcohol y drogas, a la pena, por el delito de asesinato, la pena de diecisiete años de prisión con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y, por el delito de robo con violencia, la pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y comiso y destrucción del martillo utilizado.

Segundo: Condenar a XXX a que indemnice a AAA, BBB, CCC y DDD en 62.500 euros para cada uno de ellos por los daños morales derivados del fallecimiento de su padre, debiendo indemnizar igualmente a AAA, BBB, CCC y DDD en 97,25 euros para cada uno de ellos por los efectos sustraídos y no recuperados, todo ello más los intereses determinados en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercero: Condenar a XXX al pago de las costas procesales causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria que se impone se abona al acusado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Únase a esta resolución las actas de votación del Jurado y dedúzcase testimonio de la misma que se unirá a los autos.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad a interponer en el plazo de diez días desde la última notificación.

Firme que sea esta sentencia anótese en el Registro Central de Penados y

Rebeldes y particítese al Juzgado Instructor, y de existir pieza de convicción dése a la misma el destino legal.

Así por esta sentencia, en que se expresa el veredicto del Jurado, lo pronuncio, mando y firmo.